

CINEP

ENERO							FEBRERO							MARZO										
D	L	M	J	V	S		D	L	M	J	V	S		D	L	M	J	V	S					
				1	2					1	2	3	4	5	6				1	2	3	4	5	6
3	4	5	6	7	8	9	7	8	9	10	11	12	13			7	8	9	10	11	12	13		
10	11	12	13	14	15	16	14	15	16	17	18	19	20			14	15	16	17	18	19	20		
17	18	19	20	21	22	23	21	22	23	24	25	26	27			21	22	23	24	25	26	27		
24	25	26	27	28	29	30	28									28	29	30	31					
31																								

nizaciones populares, los intelectuales comprometidos con el país, los universitarios, los diversos sectores de la Iglesia Católica y de otras iglesias, y llega hasta las campañas políticas. Quinientos estudiantes de los Andes, la Javeriana, el Externado y la Jorge Tadeo Lozano, universidades privadas de clase media y alta de Bogotá, marchan en silencio pidiendo el final de las guerras y de la violencia. Los militares de la Octava Papeleta por la Paz convocan a una consulta popular que deslegitime la guerra. El VII Foro de los Derechos Humanos respalda al grupo de la Iniciativa Ciudadana por la Paz y plantea la búsqueda de salidas negociadas y el respeto al Derecho Internacional Humanitario. Casi al mismo tiempo la Corporación SOS Colombia, la Comisión Andina de Juristas y el Cinep lanzan una campaña de prensa y eventos para atajar la ley de estado de excepción que configura un escenario de guerra en el manejo del orden público en el país. Se hace pública la decisión de la Corriente de Renovación Socialista, que se separa del ELN para proponer una negociación. Colombia no se resigna a abandonarse a la guerra.

Pero el conflicto continúa. En Bogotá, Medellín y Barranca se activan bombas sin discriminación alguna. Muchas tienen la marca del narcoterrorismo. Otra estalla junto a las instalaciones de Telecom, la empresa estatal de comunicaciones, curiosamente en el mismo momento en que se señala de terroristas a los trabajadores que defienden a la empresa como un servicio público que no debe privatizarse.

# Cien días en Colombia

## COLOMBIA 1993: BUSCANDO LA PAZ Y LA MODERNIZACION

Apenas comenzaba el año cuando el presidente Gaviria y su equipo de colaboradores promulgaron un paquete de más de sesenta decretos mediante los cuales se reformaban muchas de las entidades públicas nacionales. Esta medida, adoptada sin una previa concertación con usuarios y trabajadores, ha suscitado muchas inquietudes, críticas y contra propuestas.

También ha originado controversia la decisión del Fiscal General de la República de dictar auto de detención contra trabajadores de la empresa pública de Telecomunicaciones Telecom, por supuestos actos terroristas cometidos con ocasión del reciente cese de actividades del sindicato en contra de la anunciada intención estatal de privatizar la empresa. Aducen las organizaciones obreras y populares que se busca criminalizar cualquier tipo de protesta popular contra las decisiones gubernamentales.

Ambos hechos se dan en un contexto de hostilidades militares y terrorismo contra las grandes ciudades del país, mientras el Presidente mantiene su posición de desautorizar diálogos regionales o nacionales con la Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar y continúa la estrategia de búsqueda intensiva del narcotraficante Pablo Escobar Gaviria. No obstante lo anterior, son cada vez más numerosas las voces de quienes piden reiniciar las negociaciones de paz.

Esta es la Colombia del primer trimestre de 1993: marcada por la guerra y el sin sentido de los atentados dinamiteros, objeto de una remodelación institucional improvisada, pero emergiendo con una

sociedad civil dinámica y que quiere encontrar caminos para la reconciliación y el progreso nacional.

## SUEÑOS DE PAZ, INTOLERANCIAS DE GUERRA

¿Cómo ven el país quienes desde los sectores populares viven los conflictos más importantes de estos últimos tres meses? Para responder a esta interrogante el Cinep convocó a un grupo de personas, testigos y actores de múltiples procesos sociales: la búsqueda de la paz, las luchas de los trabajadores y campesinos, la suerte de aquellos que tomaron el camino de la reinsertión, la justicia social.

Para ellos el trimestre está marcado por «un movimiento nacional y espontáneo por la paz» como lo denomina Jesús Aníbal Suárez que sube desde las orga-

El Presidente mantiene su posición de desautorizar diálogos regionales o nacionales con la Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar y continúa la estrategia de búsqueda intensiva del narcotraficante Pablo Escobar Gaviria. No obstante lo anterior, son cada vez más numerosas las voces de quienes piden reiniciar las negociaciones de paz

## Todo se juega en Uraba

La situación es particularmente grave más allá de las grandes ciudades. El Meta y la zona bananera lo viven con intensidad. La violencia en Urabá llega al más alto nivel conocido. Para Carlos Franco, el Gobierno perdió la oportunidad de consolidar allí la paz por carecer de una estrategia adecuada. Inmediatamente después de la desmovilización había aumentado en 15% la producción de banana y en 100% el valor de la tierra. Hoy debe impulsarse la creación de un Distrito de Paz que mediante un pacto social logre una reconciliación mucho más amplia que el desarme. Porque la tensión social causada por las necesidades de ingreso económico, vivienda y servicios básicos de los habitantes se mezcla con la lucha

por el poder local que ha enfrentado claramente a la Unión Patriótica con la Alianza Democrática M 19, en cuyo seno están los reinsertos de Esperanza y Paz y Libertad.

El 11 de marzo se realizó en Apartado una reunión que buscaba un nuevo clima. Dirigentes nacionales de Esperanza Paz y Libertad, del M-19 y del Partido Comunista se reunieron con organizaciones de la región. Monseñor Duarte Cansino, Obispo de la región, asumió un papel central en la reconciliación.

Simultáneamente el Gobierno anuncia un Plan de inversión para Urabá de más de 130 mil millones de pesos, que debè hacerse desde la participación de todos los ciudadanos. La Representante Gloria Quinceno afirma: «no podemos seguir utilizando a las organizaciones sociales como correa de transmisión de los que quieren la guerra. Es gravísimo que una confrontación entre grupos militares lleve a la muerte a los sindicalistas, cuando deberíamos proteger todos el espacio de las luchas sociales».

Para Aníbal Palacios lo que está en juego en Urabá es un problema que toca la situación de violencia de todo el país: «Allí se han puesto en evidencia los factores perturbadores para cualquier proceso que lleve a la pacificación. Y estos factores tienen que ver con la actuación de los actores armados que acaban con las iniciativas ciudadanas».

### El tabu de la concertación

Los esfuerzos por la paz contrastan con el ambiente de rechazo y criminalización que desde sectores del Estado se hace a las luchas obreras y campesinas. En momentos en que la sociedad colombiana, con naturales interrogantes, se abre a la apertura internacional y a la modernización del Estado y de las empresas públicas, el Gobierno rechaza la concertación que debería ser el elemento central de procesos que requieren legitimidad ciudadana. El caso más espectacular de este rechazo se evidencia en la criminalización de la protesta de los trabajadores de Telecom. Actualmente 11 de ellos, en su mayoría ingenieros, están en la cárcel acusados de sabotaje contra la misma empresa. El Sindicato dice que no se realizó entrega formal de los equipos a los técnicos extranjeros, ni existen pruebas de daños ocurridos. Argumentan que el servicio fue restituido tan pronto como se logró el acuerdo laboral, lo que no hubiera sido posible en caso de sabotaje. «Estos trabajadores son de los mejores, defensores de la misma empresa. Es gravísimo que aparezcan acusados de terrorismo», dicen sus

compañeros.

Para Julio Roberto Gómez «se quiere escarmentar al movimiento sindical desde la Fiscalía», aludiendo también a la manera como el Fiscal rechazó la protesta de los líderes sindicales que llegaron a su oficina, iniciando una investigación penal contra ellos. Queda la sensación de que quiere montarse desde el Ejecutivo una política de desarticulación de todas las organizaciones civiles que busquen salidas negociadas o no compartan las políticas del Presidente.

La negativa a la concertación ha llevado a la CUT y demás centrales obreras y campesinas a agruparse en contra de la implantación de la política neoliberal sin consultar al pueblo. Como anota Luis Eduardo Garzón, el llamado a las protestas sociales cívicas comienza a llenar el escenario. En las comisiones séptimas de Senado y Cámara se adelantan grandes debates para defender los derechos sociales de los colombianos.

En este contexto Monseñor Guillermo Vega opina que trabajadores, campesinos y ciudadanos deben utilizar los instrumentos de derecho y de política social que ha creado la nueva Constitución con decisión y sin ambigüedades. Sólo así será posible enfrentar medidas gubernamentales tan delicadas como la privatización del Sena, que «es el más grande logro de las clases trabajadoras de este país». De igual manera, para Monseñor Vega es delicado que el proceso de privatización vulnere la seguridad social de las mayorías al dividir entre empresarios individuales los fondos de seguridad y de pensiones que podían cubrir a muchos gracias a que se apoyaban en la racionalidad del colchón de seguridad que dan los grandes números.

En conjunto, no asombran ni las medidas tomadas por el Gobierno ni la ausencia de consulta popular en la toma de las mismas. Tampoco la intolerancia por parte del Estado frente al esfuerzo de los ciudadanos por participar en las decisiones. Asombra es que el Gobierno no se dé cuenta que la democracia se logra abriendo espacios para el movimiento popular en sus expresiones sociales, obreras y campesinas. Y que dar lugar a las más diversas formas de concertación legítima al mismo Estado. Una amplitud semejante vigorizaría las expresiones civiles de negociación y le cerraría el paso a los que actúan por las armas.

### ASISTENTES:

- Monseñor Guillermo Vega, Comisión de Vida, Justicia y Paz del Episcopado Colombiano.

- Aníbal Palacio, Senador de la República.
- Gloria Quinceno, Representante a la Cámara
- Carlos Franco, Esperanza, Paz y Libertad
- Jesús Aníbal Suárez, Comité Permanente para la Defensa de los Derechos Humanos.
- Luis Eduardo Garzón, Central Unitaria de Trabajadores CUT
- Julio Roberto Gómez y Miguel Angel Delgado, Confederación General de Trabajadores Demócratas CGTD
- Representantes del sindicato de Telecom
- Juan Carlos Celis, Movimiento Octava Papeleta por la Paz
- Hernando Corral, periodista
- Consejo Nacional de Organizaciones Agrarias, Indígenas y Campesinos de Colombia, Conaic

## MODERNIZACION DEL ESTADO COLOMBIANO

### La quimera del Estado eficiente

*Camilo Castellanos*

El actual paquete modernizador es, por decir lo menos, desestimulante del espíritu público. El gobierno ha actuado más allá de lo que lo autorizaba la nueva Carta como si lo público fuera suyo. Tal vez esto explique el sigilo con que se gestó la reforma. La infraestructura que se construyó para entidades como el Sena, Cajanal o Prosocial, con aportes salariales en buena medida, hoy está en fería. Fue con sus impuestos que varias generaciones de colombianos hicieron posible el no tan poderoso Estado colombiano que hoy están privatizando. Plancación Nacional es hoy el ente que definirá criterios de eficiencia en la administración, evaluará su aplicación y conforme a ellos asignará recursos. Es indudable que se han creado mecanismos para racionalizar la gestión pública, como los fondos de cofinanciación. Lo que de paso debe tener contentos a los inconformes con el supuesto debilitamiento del Ejecutivo en la nueva Constitución.

Empero, desplazado el centro de la decisión del gasto, veremos la puja por el control clientelista del Departamento

Nacional de Planeación, mecanismo aún más cómodo si para esta dependencia el control democrático es casi imposible. Es tanta la concentración de Funciones en Planeación ahora no sólo determinará la política sino que tendrá la chequera. Es tan extendida la tradicional debilidad del control entre nosotros, y persiste con tanto vigor el clientelismo, que no sorprendería el fortalecimiento de los actuales vicios del Estado colombiano, ahora revestido de tecnocracia. Más aún si se sigue menejando la cosa pública como propiedad gubernamental.

No parece posible el funcionamiento racional de un Estado irracional. Porque no es dable una inversión eficiente si al Estado se lo vive como bien patrimonial al servicio de quienes lo controlan. Esto es, cuando el Estado existe como otro interés particular. Cosa que, si vemos bien, desgraciadamente ocurre en esta administración.

Para alcanzar el sueño del Estado eficiente nos tocará esperar el feliz día en que la reforma administrativa se acompañe de una profunda transformación en las concepciones y las prácticas políticas. Entre tanto, tendremos que seguir resistiendo la tenaz privatización del Estado colombiano.

### Tras el poder financiero

*Jorge Iván González*

La reciente reforma de la administración pública busca ante todo consolidar la regulación financiera del Estado. Se avanza hacia una nueva forma de mediación estatal: la intervención directa se ha debilitado mientras se fortalece el control institucional y financiero.

En lugar de ofrecer los servicios con instituciones y personal propio, el Estado colombiano prefiere administrar Fondos y subcontratos. En cambio de ampliar la nómina de maestros y construir nuevas escuelas, opta por ofrecer subsidios y préstamos para que los estudiantes escojan el centro educativo que consideren más conveniente. Antes que contratar personal para hacer una carretera, maneja los recursos y le entrega la obra a una firma privada. En vez de mantener el Instituto de Seguros Sociales, propone la creación de Fondos de pensiones de carácter privado, regulados por el gobierno. En cambio de administrar empresas, proporciona las condiciones financieras adecuadas para que los particulares adquieran las industrias. Antes que aumentar el número de instructores del SENA, el Estado entrega la administración de los centros de

formación profesional a corporaciones privadas. Surgen, entre otros, el Fondo de Cofinanciación para la Inversión Social (FIS) y el Fondo de Cofinanciación para la Infraestructura Vial y Urbana.

Estos son apenas algunos ejemplos ilustrativos de las nuevas modalidades que va adquiriendo la intervención del Estado.

### Los trabajadores: una opción diferente

*Marta Elena Rodríguez*

El reclamo principal de los trabajadores radica en el hecho de no habérselos tomado en cuenta a la hora de adoptar decisiones en las que estaban totalmente involucrados.

Pero las últimas acciones sindicales no tienen el mismo corte de épocas anteriores. Hoy existe una posición más reflexiva, en donde prima la conciencia de la necesidad de modernizar el Estado y superar la deficiencia en la gestión pública. En consecuencia, la mayoría no se opone al proceso de reestructuración. Por el contrario, como se propone en carta enviada al Presidente de la República, lo que se busca es que «en el marco de concertación establecida en la Constitución se encuentren salidas que aclimaten la paz laboral y que contribuyan a una real modernización social del derecho...» (91).

Otro punto que preocupa es el de los despidos. El gobierno ha afirmado que son 25 mil empleados estatales desvinculados. Sin embargo, las cifras presentadas por los sindicatos dicen otra cosa. En el Ministerio de Obras son más de 12 mil los afectados, en el Incora mil cien, en Cajanal unos mil, en el ICA por lo menos cinco mil, en la Caja Agraria tres mil, en Idema 900, sin contar los datos de otros Ministerios, Prosocial, ISS, Sena, Vecol y entidades como el Fondo Nacional de Bienestar Social o Focine, que se liquidaron (2).

Pero lo que se cuestiona no es el hecho en sí de la reducción de nóminas sino la concepción general del Estado que se vislumbra tras los decretos que consagran la reestructuración de las entidades oficiales. También existen resistencias a la decisión de privatizar instituciones que como Prosocial, Cajanal o el Sena son patrimonio de los trabajadores y se sostienen básicamente con sus aportes (3).

Buscan igualmente dinamizar su propia participación en la creación de las nuevas instituciones, contribuyendo con

proyectos alternativos para que el Estado siga cumpliendo con sus fines esenciales de beneficio de la comunidad. Un buen ejemplo de ello: es el que impulsan los trabajadores del Sena en el sentido de crear una Universidad del Pueblo con formación profesional y gratuita (4).

Otro de los puntos importantes en este proceso es el futuro de interrogantes como alternativas económicas, la inversión del dinero de las indemnizaciones, la generación de fuentes de trabajo o el apoyo a proyectos productivos. Hay quienes pretenden comprar instalaciones que serán clausuradas, o asumir funciones de las empresas que se prevé serán cerradas con el fin de apoyar algún sector clave para la economía.

Pero esta búsqueda, más pragmática, no está exenta de problemas. Muchos dirigentes sindicales se preguntan si con este tipo de alternativas se le está haciendo el juego al gobierno, o se abandonan las históricas conquistas de la clase obrera y se claudica frente a las nuevas formas que asume la confrontación capital trabajo.

Por otra parte, hay que tener en cuenta que a pesar de todo este dinamismo la mayoría de las propuestas planteadas por los trabajadores y sus organizaciones han sido recibidas con indiferencia por el Gobierno y han tenido escaso eco en los medios de comunicación.

No obstante lo anterior, no hay duda de que con ellas los trabajadores están demostrando su capacidad de gestión y de organización. En el fondo, más que intervenir puntualmente en la reestructuración actual, lo que se están jugando es la construcción de una nueva relación con el Estado y la sociedad, desde donde aporten propuestas integrales de reorganización en la órbita general de lo público. Claro que todavía queda camino por recorrer: las organizaciones tienen que fortalecerse interiormente, profundizar los canales de unidad sindical, buscar acuerdos con el movimiento social, crear consensos en torno a la acción popular y avanzar en la definición del modelo de desarrollo que buscan impulsar. De esta manera lograrán que la concertación no sea un esquivo don presidencial sino un imperativo de la vida cotidiana de nuestra nación.

1. La Modernización del Estado y el Sector Agropecuario. Enero 25 de 1993. Junta Ampliada CUT, CTC.
2. El Estado neoliberal. Comité Ejecutivo de Fenaltrase. Enero 21 1993. Mimeo.
3. *Ibidem*.
4. Por Formación Profesional Integral y Gratuita Sena: la Universidad del Pueblo. Sindesena. 1993.